Consecuentemente, se llega a la conclusión de que en el momento de las denuncias se carecía de la correspondiente licencia municipal de apertura, documento que, una vez concedido, es el que permite el ejercicio de la actividad. Todo ello a tenor de lo dispuesto en los arts. 2.1 y 9.1 de la citada Ley 13/1999.

Por tanto, se confirma la existencia de infracción debidamente tipificada en el art. 20.1 de la citada Ley 13/1999, no pudiéndose acoger las alegaciones del recurrente.

Cuarto. En relación con la alegación referente a la carencia de Libro de Hojas de Reclamaciones, se ha de señalar a tenor de lo dispuesto en los arts. 14.h) y 15.c) de la citada Ley 13/1999, en relación con el art. 18 de la Ley 13/2003, de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios, resulta evidente que en un establecimiento como el que nos ocupa tendrá que existir a disposición del público, un Libro de Hojas de Reclamaciones. Es decir, este Libro debe estar en el establecimiento y ser puesto a disposición del público en el momento en que sea demandado, de tal manera que el hecho de que, aún disponiendo de él, no se encontrara en el establecimiento o fuera ilocalizable dentro de él, representaría una frustración de la finalidad perseguida por la normativa vigente y, por tanto, se estaría incurriendo en una infracción.

Pues bien, y en relación con lo anteriormente indicado, consta en el expediente la denuncia (correspondiente al 11.6.2005) en la que se indica que el establecimiento no presenta hojas de Reclamaciones, manifestando que está en la gestoría (denuncia recepcionada por el recurrente). Dichos hechos gozan de la presunción de veracidad en los términos previstos en el art. 137.3 de la Ley 30/1992, en relación con el art. 30.1 de la citada Ley 13/1999, y los arts. 4.10 y 5.1 del Decreto 165/2003, de 17 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Inspección, Control y Régimen Sancionador de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas de Andalucía. Frente a ello, el recurrente se limita a aportar copia de la portada de las hojas de reclamaciones con las instrucciones correspondientes.

Fundamentado en todo lo anterior, hay que concluir que, en el caso que nos ocupa, los hechos imputados deben ser tenidos por ciertos al haber sido objeto de comprobación por inspección directa de los funcionarios que formularon la denuncia y no deducir el interesado en las actuaciones hasta ahora practicadas, prueba suficiente que los desvirtúa, ya que, la simple aportación con posterioridad a los hechos denunciados del libro de reclamaciones, no demuestra que en dicho momento estuviera disponible para el público. Consecuentemente, esta alegación no puede ser aceptada.

Por tanto, se aprecia la existencia de la infracción sancionada no pudiendo acogerse las alegaciones del recurrente.

Vistos los preceptos citados, concordantes y demás de general y especial aplicación

R E S U E L V O

Estimar parcialmente el recurso de alzada interpuesto por don Salvador García Ambrosio contra la resolución del Ilmo. Sr. Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, de fecha 7 de febrero de 2007, recaída en el expediente sancionador núm. SE-142/06-EP (S.L. 2007/55/714), en el sentido de anular la sanción impuesta relativa al seguro de responsabilidad civil (3.000 euros -tres mil euros-) y confirmar el resto de la resolución impugnada.

Notifíquese con indicación de los recursos que procedan.- La Secretaría General Técnica. Fdo.: Isabel Liviano Peña.»

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de

su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por la Secretaría General Técnica al recurso de alzada interpuesto por don Juan Acuña Tejero contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Granada, recaída en el expediente 00018-010522-06-R.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal al recurrente Juan Acuña Tejero de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio reproduciéndose a continuación el texto íntegro:

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 21 de mayo de 2008

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de los siguientes antecedentes:

Primero. El Delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada dictó la Resolución de referencia, recaída en materia de suministro domiciliario de agua potable, resolviendo: "Desestimar la reclamación efectuada por don Juan Acuña Tejero en cuanto a la actuación de la Entidad Suministradora en la labor de inspección, encontrándose amparada en el art. 93 del Decreto 120/1991, que habilita a las mismas a girar la correspondiente liquidación por fraude cuando se hayan detectado irregularidades en el suministro de agua".

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos a la resolución impugnada en aras del principio de economía procesal.

Segundo. Contra la anterior Resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó que acredita con testimonios (vecinos de las viviendas núm. 30, 31, 33) que en la vivienda calle Reyes Católicos no ha habido nunca clase alguna de derroche de agua; son residentes en Alemania, solo acuden en verano por 2-6 semanas, desmintiendo la acusación de la empresa suministradora; con testimonio de 3 personas acredita que el inspector de Aguasvira entró desautorizado en la vivienda para poder poner la sanción de 1.100 euros.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Segundo. De conformidad con el artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma, en su virtud se incorpora el texto del informe al recurso de alzada emitido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada de fecha 18 de mayo de 2007, en el que textualmente se manifiesta que: "(...).

Tercero. En base a las alegaciones formuladas cabe manifestar que, examinada la documentación contenida en el expediente, y a la vista de los informes emitidos queda comprobado que se ha producido un fraude en el suministro de agua, quedando acreditada en la correspondiente Acta de Inspección emitida cumpliendo los requisitos que recoge el art. 91 del Decreto 120/1991, de 11 de junio.

Por otra parte en el recurso de alzada no queda demostrada las acreditaciones alegadas por el recurrente, y por tanto, estas alegaciones no pueden desvirtuar el contenido de la Resolución, por lo que ésta que plenamente validada en todos sus términos".

Vistos los preceptos citados y normas de general y especial aplicación,

RESUELVO

Desestimar el recurso de alzada interpuesto por Juan Acuña Tejero contra la resolución del Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Granada, de fecha referenciada, en consecuencia mantener la misma en sus propios términos.

Notifíquese al interesado, con indicación de los recursos que procedan. La Secretaria General Técnica. Fdo.: Isabel Liviano Peña».

Contra la presente Resolución, que agota la vía administrativa, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su notificación o publicación, ante los correspondientes órganos judiciales de este orden, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 46.1 de la Ley 29/98, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Sevilla, 2 de octubre de 2008.- El Jefe de Servicio de Legislación, Manuel Núñez Gómez.

ANUNCIO de 2 de octubre de 2008, de la Secretaría General Técnica, por el que se notifica la resolución adoptada por la Secretaría General Técnica al recurso de alzada interpuesto por doña María del Carmen Quiros Abad, en nombre y representación de Promotora Bahía Tour Campo de Gibraltar, S.L., contra otra dictada por el Delegado del Gobierno en Cádiz, recaída en el expediente 11-000042-07-P.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, e intentada sin efecto la notificación personal a María del Carmen Quiros Abad, en nombre y representación de Promotora Bahía Tour Campo de Gibraltar, S.L., de la resolución adoptada por el Secretario General Técnico, al recurso administrativo interpuesto, contra la dictada por el Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, por la presente se procede a hacer pública la misma, al no haberse podido practicar en su domicilio, reproduciéndose a continuación el texto íntegro.

Se le comunica que el expediente administrativo se encuentra en las dependencias del Servicio de Legislación de esta Secretaría General Técnica (Plaza Nueva, 4, Sevilla), pudiendo acceder al mismo previa acreditación de su identidad.

«En la ciudad de Sevilla, a 18 de julio de 2008.

Visto el recurso de alzada interpuesto y sobre la base de los siguientes antecedentes

Primero. El Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz dictó la Resolución de referencia, por la que se le impone una sanción de 22800 €, tras la tramitación del correspondiente expediente, por los siguientes hechos:

- Incumplimiento en la información de la venta de bienes.
- Incumplir medidas o requerimientos de la Administración.
- No formalizar seguros, avales u otras garantías.
- No disponer de libro de hojas de reclamaciones.

En cuanto a los fundamentos de derecho, nos remitimos a la resolución impugnada en aras del principio de economía procesal.

Segundo. Contra la anterior resolución, se interpuso recurso de alzada, en el que, en síntesis, se alegó:

- Rechazan los hechos expresados en la resolución del expediente sancionador, que ni se ajustan a la realidad ni tienen la suficiente descripción.
- No se ha incumplido el Decreto 218/2005 ni las obligaciones inherentes al cumplimiento de las obligaciones de venta ni de la formalización de seguros o avales por las siguientes razones:

- Solo existen actos preparatorios de lo que en su día podría ser una promoción, luego no hay contratos de compraventa.

- No existía licencia, sin ella no pueden realizarse operaciones de transmisión de propiedad alguna, por lo que no se puede obtener ni facilitar seguros ni avales ni garantías que aseguren las cantidades entregadas a cuenta pues no hay compraventa.

- Que sí existían hojas de reclamaciones.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. Esta Secretaría General Técnica es competente, por delegación de la Consejera realizada por la Orden de 30 de junio de 2004, para conocer y resolver el presente recurso de alzada, a tenor de lo dispuesto en los artículos 114.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en adelante, LRJAP-PAC), y 115 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía.

Segundo. Partiendo de la base de que la recurrente no formuló alegaciones durante la tramitación del expediente, y que precisamente en su recurso simplemente niega los hechos, sin mayor argumentación jurídica convincente, no podemos sino confirmar los fundamentos de derecho de la resolución impugnada, además, de conformidad con el artículo 89.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, la aceptación de informes o dictámenes servirá de motivación a la resolución cuando se incorporen al texto de la misma, en su virtud se incorpora el texto del informe al recurso de alzada emitido por la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz de fecha 22 de agosto de 2007, en el que textualmente se manifiesta que: